

Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común – Sala I

Objeto: **expresar agravios – hacer reserva del caso federal**

Juicio: “Brandán de Castaño, Jovita Faustina y otros c/ Correa, Hugo Atilio y Compañía de Seguros Rivadavia s/ Daños y perjuicios” (Expte. N° 508/14)

Pablo Aráoz, por la citada en garantía, a V.E. con respeto digo:

Vengo a expresar los motivos por los que nos agravia la sentencia dictada el 01.02.19, y a solicitar que se revoque la misma, en mérito a las siguientes consideraciones.

I- ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Nos agravia el fallo recurrido, en primer lugar, en tanto atribuye al señor Correa responsabilidad en el accidente, en un 50%, por haber el a quo “descifrado” la mecánica del accidente, suponiendo para ello que el camión pasó muy cerca del ciclista, sin respetar la debida distancia para hacerlo, provocando con el aire que expulsa ese vehículo que el Sr. Castaño perdiera el equilibrio y cayera al suelo.

Supone el a quo, sin ningún fundamento, que Correa no advirtió al ciclista su presencia y que el camión lo sobrepasó demasiado cerca.

En primer lugar debemos señalar que, conforme a los principios de nuestro derecho procesal, correspondía a la parte actora acreditar el contacto que dice que existió entre la bicicleta y el camión. Dicho contacto, como está acreditado en autos con la prueba pericial mecánica, no existió. Y los testigos ofrecidos por la parte actora son tan contradictorios entre sí, como fue expuesto al momento de tacharlos, que el a quo optó por descartar sus testimonios.

Tampoco está probado que el camión haya expulsado aire en cantidad suficiente como para que el ciclista perdiera el equilibrio. Y, debemos señalarlo, esa posibilidad no deja de ser una mera hipótesis que no ha sido comprobada.

Más aún, ni el a quo ni los actores, pudiendo hacerlo, consultaron al perito Ing. Mecánico desinsaculado en autos sobre tal circunstancia.

No podemos dejar de señalar que el aire que podría expulsar el camión seguramente está relacionado directamente con su velocidad de circulación. Y, según lo sostuvo el señor Correa al absolver posiciones (fs. 295) circulaba a baja velocidad, entre 45 y 50 km/h. Por ello, el aire que podría haber expulsado, ciertamente no podría tener fuerza suficiente para hacer perder el equilibrio a un ciclista que pudo claramente prever la aproximación del camión por el ruido que éste despidió en su andar y, luego, por las luces que llevaba encendidas.

En segundo lugar, tampoco existe prueba alguna de que el camión no guardara una distancia prudencial para sobrepasar al ciclista. No existe ninguna prueba de por dónde circulaba el camión, máxime cuando el demandado, al absolver posiciones, manifestó que lo pudo esquivar. Una vez más, la prueba de la proximidad de sobrepaso estaba a cargo de la parte actora, pero no produjo ninguna prueba tendiente a ello.

En definitiva, no existe ninguna prueba, ni siquiera indiciaria, que permita al a quo sostener que el ciclista cayó como consecuencia de que el camión pasó demasiado cerca suyo, expulsando un viento suficiente para hacerlo perder el equilibrio.

Lo único que está acreditado en autos es que el ciclista circulaba de noche, por la banquina de una ruta, sin ningún tipo de elemento que permitiera advertir su presencia y que, por alguna causa desconocida, cayó de su bicicleta. Es de advertir que el ciclista se colocó, voluntariamente, en una situación de riesgo y que, sin duda tenía que conocer que los vehículos, no sólo los de gran tamaño, expulsan algo de aire en su marcha. Por ello, ante la proximidad de cualquier vehículo debía estar preparado para sobrellevar esa situación.

El único responsable de su caída es, sin dudas, el propio ciclista, por lo que corresponde rechazar la demanda interpuesta y pido que V.E. así lo determine al revocar la sentencia recurrida.

II- LAS CAUSAS DEL FALLECIMIENTO

Nos agravia también la sentencia dictada en autos en tanto determina que el fallecimiento del señor Castaño sería una consecuencia del accidente, para lo cual se limita a descartar que la causa de su muerte pudiera estar relacionada **“exclusivamente”** con su condición de fumador.

Según surge del certificado de defunción acompañado en autos, el fallecimiento del señor Castaño se habría producido por dos causas: un shock séptico y un traumatismo encéfalo craneano.

Ahora bien, la utilización del vocablo “exclusivamente” por parte del a quo, nos lleva a pensar que sí considera que existe alguna vinculación entre la muerte del señor Castaño y su tabaquismo. Y entendemos que ello es así en base a las constancias de la historia clínica adjuntada en autos.

En efecto, no sólo resultan incontables las referencias que hace la historia clínica a la condición de tabaquista “severo” (fs. 26) y etilismo (fs. 10, 14, 15, entre otras, que podría estar vinculado a lo manifestado por el demandado al absolver posiciones, respecto del aliento etílico que presentaba el señor Castaño cuando lo ayudara en el accidente), sino también a que cuando reingresó al Hospital, el 15.08.13, es decir a tres meses del accidente, presentaba como diagnóstico de ingreso un **“shock séptico por foco respiratorio”** (fs. 26). En las fojas siguientes de la historia clínica se lee, reiteradamente la referencia a *“shock séptico a foco probable respiratorio y urinario”*.

Indudablemente los problemas respiratorios y urinarios del señor Castaño, que le provocaron la infección que a la postre fue la causa (o concausa de su fallecimiento) nada tienen que ver con su caída de la bicicleta, donde sufrió un traumatismo de cráneo y un fractura de un brazo. En consecuencia, no hay ningún elemento que nos permita vincular el shock séptico (sin duda la principal causa de la muerte de Castaño) con el accidente.

Y si analizamos la otra causa de muerte referida en el acta de defunción, debemos señalar que, además de que no existen certezas de que en los tres meses que pasaron entre el accidente y el reingreso del señor Castaño al hospital no hubiera sufrido otro golpe en su cabeza, las eventuales consecuencias de las lesiones que

sufrió en el accidente en esa parte de su cuerpo están directamente relacionadas con la falta de uso del casco protector obligatorio que debía llevar colocado para andar en bicicleta, conforme a la Ley Nacional de Tránsito a la que se encuentra adherida nuestra Provincia.

Nuestra jurisprudencia tiene dicho que *“En el caso de autos, la omisión de llevar colocado el casco no reviste solo la calidad de infringir una norma de tránsito, toda vez que lo que se reclama es una incapacidad que tiene una relación directa con la lesión producida como consecuencia del impacto sufrido por la actora en la región craneana, tal como lo describen todos los estudios médicos antes detallados, y sus secuelas (4% de incapacidad) la que podría haberse evitado o al menos disminuido, en caso de haber tenido la protección del casco reglamentario; por lo que esa transgresión legal (impuesta para protección y seguridad de los motociclistas), tuvo incidencia causal fundamental con las lesiones en la cabeza de la actora. En consecuencia, si bien la actora demostró que la lesión padecida guarda relación causal con el traumatismo sufrido en el accidente, sus agravios no resultan procedentes en tanto no acreditó que aún con el casco reglamentario que exige la ley de tránsito, se habrían producido las lesiones en la cabeza. Por esto considero que cabe confirmar la sentencia recurrida en cuanto desestimó el reclamo por incapacidad sobreviniente”*. (CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - CONCEPCION - Sala Única S/ ORDINARIO (RESIDUAL) - Nro. Sent: 137 Fecha Sentencia 14/06/2018).

En definitiva, siendo que el shock séptico a que hace referencia el certificado de defunción no tiene ninguna relación con el accidente y, que si el traumatismo encéfalo craneano que menciona dicho documento es el sufrido en el accidente, sus consecuencias se deben exclusivamente a la falta del uso de casco obligatorio, tampoco puede condenarse a mi mandante a abonar una indemnización. Por ello, corresponde, cualquier caso, rechazar la demanda interpuesta.

III- INEXISTENCIA DE UNA ADECUADA RELACIÓN DE CAUSALIDAD

Vinculado con los agravios referidos a la causa del fallecimiento del señor Castaño, entendemos que no existe una adecuada relación de causalidad entre la caída de su bicicleta y su fallecimiento.

En efecto, según lo sostienen los artículos 904, 905 y 906 del Código Civil de Vélez Sarsfield, “Art. 904. *Las consecuencias mediatas son también imputables al autor del hecho, cuando las hubiere previsto, y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa, haya podido preverlas.- Art. 905. Las consecuencias puramente casuales no son imputables al autor del hecho, sino cuando debieron resultar, según las miras que tuvo al ejecutar el hecho.- Art. 906. En ningún caso son imputables las consecuencias remotas, que no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad*”.

En el caso de autos, aun cuando se sostuviera que el fallecimiento del señor Castaño fue consecuencia de su caída de la bicicleta, cosa que negamos terminantemente, como explicaremos infra, se trataría de una consecuencia casual y, por lo tanto, no indemnizable.

Para explicar con mayor claridad lo expuesto, recurriremos a la sapiencia del Dr. Marcelo López Mesa, sintetizada en el fallo dictado por el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Rosario de la 6ta Nom., el día 31.07.2015, en los autos caratulados C. N. M. c/ Provincia de Santa Fe y otro s/ daños y perjuicios (**Cita:** MJ-JU-M-95170-AR | MJJ95170 | MJJ95170).

Sostiene el Dr. López Mesa (López Mesa, Marcelo Causalidad virtual, concausas, resultados desproporcionados y daños en cascada, Publicado en: LA LEY 12/08/2013, 1 • LA LEY 2013-D,1167): “*diremos inicialmente que la relación de causalidad o nexo causal, entre la conducta del responsable y el daño causado, es la base de la responsabilidad civil. Si no se puede trazar un nexo de causalidad adecuada entre la antedicha conducta del presunto responsable (en los factores subjetivos de responsabilidad) o su esfera de garantía (en la responsabilidad objetiva) y el daño acreditado, no queda más que la resignación cristiana de la víctima, pues ella no puede obtener resarcimiento de quien no se halla unido al daño por un nexo adecuado de causalidad. Es que, para que una persona pueda ser tenida como civilmente responsable por un hecho ilícito dañoso, resulta imprescindible que el daño pueda ser objetivamente atribuido a la acción u omisión de un hombre o al hecho de una cosa. Para determinar la causa de un daño, se debe hacer ex post facto un juicio de adecuación o cálculo de probabilidad: a la luz de los hechos de la causa, habrá que preguntarse si la acción u omisión del presunto agente -en abstracto y prescindiendo de sus condiciones particulares-, era por sí misma apta para ocasionar el daño según el curso ordinario de las cosas. Si se contesta afirmativamente de acuerdo con la*

experiencia diaria de la vida, se declarará que la acción u omisión era adecuada para producir el daño, el que será entonces imputable objetivamente al agente. Si se contesta que no, faltará la relación causal, aunque considerado el caso en concreto tenga que admitirse que dicha conducta fue también una conditio sine qua non del daño, pues de haber faltado este último no se habría producido o, al menos, no de esa manera. El concepto evidentemente central de la probabilidad debe entenderse objetivamente: como un grado determinado de posibilidad objetiva. Por tanto, dicho juicio de probabilidad debe fundarse en hechos conocidos y cognoscibles ex ante, es decir al momento en que se produjo el hecho dañoso y, para separar lo más claramente posible la adecuación causal de los criterios de la culpa, debe tenerse en cuenta para el análisis de probabilidad causal no sólo aquellos datos o elementos de hecho conocidos por el sujeto responsable, sino también todas las circunstancias que resultaran cognoscibles para un observador medio, ubicado en su lugar. La relación causal es aquel elemento del acto ilícito que vincula el daño directamente con el hecho dañoso e, indirectamente, con el elemento de imputación subjetiva o de atribución objetiva de responsabilidad, razón por la cual, como factor aglutinante que es, hace que el daño y el riesgo queden integrados en el acto que es fuente de la obligación de indemnización.”

El autor citado entiende inaplicable en nuestro derecho la llamada “causalidad virtual” y los “daños en cascada”, y sobre el particular afirma que “Ejemplos paradigmáticos de ello son el del accidente de tránsito que lesiona a una víctima y que torna necesaria una intervención quirúrgica, en el curso de la cual surge un nuevo daño, por caso, la pérdida de un órgano por culpa médica o el contagio del SIDA por la sangre viciosa transfundida. En este supuesto, si estuviéramos en el derecho francés, podría aplicarse la doctrina de la causalidad virtual, que imputaría todos los daños al primer agente, al entender que todos se han producido a consecuencia de esa primera causa puesta por él. Pero en el derecho argentino y en aquellos que adoptaron la doctrina de la causalidad adecuada (art. 906 Cód. Civil, a contrario sensu), las consecuencias subsiguientes al primer daño no son imputables al conductor que colisionara a la víctima, pues no están en relación causal adecuada con su accionar. Claramente, en el marco de nuestro derecho vigente los daños en cascada constituyen consecuencias -si no remotas, al menos casuales- de un hecho, y ambas consecuencias -remotas y casuales- se encuentran fuera del sistema de imputación vigente (arts. 906 y 905 del Código Civil). El legislador ha sido sabio; es de toda lógica que “el incumplimiento del deudor puede desatar una serie indefinida de perjuicios; pero él no siempre está obligado a indemnizarlos todos, pues la ley establece

limitaciones al respecto que, en algunos casos, obedecen a la naturaleza de los perjuicios y, en otros, a la vinculación de éstos con el hecho o hechos que se le atribuyen. Así, la causalidad adecuada separa de todo el daño el segmento indemnizable, que veda indemnizar las concausas, que normalmente son dolencias previas del damnificado pero que, en cualquier caso, se trata de un daño causado por un hecho ajeno que interfiere con el del dañador. Pero, también la causalidad adecuada, impide indemnizar los daños futuros no necesariamente relacionados con el proceder reprochable del responsable, como serían los daños en cascada, en los que - también- un hecho ajeno posterior, interfiere el curso causal imputable al dañador. Computar en la ecuación resarcitoria un hecho futuro de acaecimiento no necesario, sino contingente o eventual, exigiría un ejercicio de anticipación temporal meramente adivinatorio e incompatible con los requisitos indisponibles de certeza del daño y de causalidad adecuada”.

Concluye, finalmente el autor aseverando -entre otras- que *“El nexo de causalidad debe ser claramente establecido, no pudiendo quedar sujeto a dubitaciones o conjeturas; si la causalidad entre la actuación del presunto responsable y el daño es imposible de establecer con certidumbre, el reclamo debe ser rechazado y no deben darse tampoco premios consuelo, pues sin causalidad no existe la posibilidad ni de indemnizar, ni de compensar. La falta de prueba de la relación causal o la prueba de la existencia de una causa ajena lo que constituye, en rigor, la prueba de una no-causalidad, implican el rechazo de la demanda dirigida a quien ha quedado al margen de una relación causal acreditada con el daño. Y existen también conjeturas de causalidad, travestidas de presunciones, que muchas veces emanan solamente del deseo del juez de acordar una indemnización graciosa, antes que de una inferencia legítima de éste, a partir de indicios serios, graves y concordantes, acreditados en el caso a fallar”.*

La Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe, en un caso similar al presente, donde la discusión versaba en si la causa de la muerte era el accidente o una sepsis hospitalaria indicó que *“Doy por acreditado que el resultado de muerte que sufre la Sra. de Z. ha tenido su origen en una sepsis piociánica, presuntamente adquirida en el centro asistencial en que se encontraba internada (.). Que en un alto porcentaje (.) lesiones similares a las de la Sra. de Z. no concluyen en el fallecimiento de quien las soporta, lo cual lleva a concluir que no existe un nexo causal entre la muerte de la Sra. de Z. y la actividad del demandado. En síntesis, advierto que se ha producido una circunstancia extraña -la infección contraída que causa la muerte de la señora- que no se compadece con el curso normal y ordinario*

que se suscita en este tipo de accidentes, y ello lleva a merituar la inexistencia del nexo causal en el desenlace ulterior de la cuestión analizada". (C. L. s/ recurso de inconstitucionalidad – homicidio culposo (expte.: c.s.j. nro. 881 año 1995): Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe: 7-sep-2005: MJ-JU-M-59615-AR | MJJ59615 | MJJ59615).

Transcriptas que fueron las partes pertinentes del fallo del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Rosario, debemos decir que en el caso de autos, la lesión sufrida por el señor Castaño no podría, de acuerdo al curso normal y ordinario de las cosas, llevarlo a su fallecimiento.

Su muerte se produjo como consecuencia directa de una infección de origen respiratorio, tal como surge de las historias clínicas acompañadas en autos. Por lo tanto, no corresponde, en ningún caso, condenar al pago de una indemnización por el fallecimiento del señor Castaño.

IV- EL MONTO INDEMNIZATORIO ACORDADO **POR VALOR VIDA**

Nos agravia también la sentencia en tanto acuerda para la viuda del señor Castaño una indemnización por "valor vida", de \$ 492.855,48.

Según la pacífica jurisprudencia la vida humana no tiene valor en sí mismo, por lo que lo que se indemniza es el lucro cesante que se provoca la muerte de quien realiza un aporte económico al reclamante, o la pérdida de la chance de obtenerlo en el futuro.

Ahora bien, el a quo para estimar la indemnización realiza el cálculo de los eventuales ingresos que podría haber obtenido en el futuro el accionante (de acuerdo al S.M.V.M), a través del sistema de la renta capitalizada previsto por el Código Civil y Comercial de la Nación. Al monto así obtenido (\$ 985.710,96) le aplica el porcentaje de responsabilidad que le atribuye al demandado Correa, obteniendo así la suma de \$ 492.855,48, que es en definitiva el monto de la condena por el rubro bajo análisis.

Sin embargo, debemos señalar que el monto acordado por indemnización resulta excesivo, pues parte de la falsa premisa de que el fallecido aportaba, o podría haberlo hecho, el 100% de sus ingresos a su cónyuge.

El error consiste en omitir considerar que el señor Castaño destinaba, sin lugar a duda, parte de sus ingresos a su propia manutención, por lo que mal podría haber dispuesto de la totalidad de ellos para su cónyuge.

En base a ello, debemos considerar que, de acuerdo al régimen de ganancialidad de bienes previsto para la sociedad conyugal, resultaría razonable considerar que el señor Castaño hubiera podido aportar a su cónyuge, a lo sumo, el 50% de sus ingresos, razón por la que, corresponde en cualquier caso que se reduzca sensiblemente la suma concedida como indemnización ajustándola a las reales expectativas de ayuda económica que podría tener la actora respecto de su marido.

V- LA IMPOSICIÓN DE COSTAS

Agravia también a mis mandantes la imposición que el a quo hace de las costas procesales al señor Correa y a mi mandante, por considerarlos “vencidos” en el presente juicio.

Como V.E. podrá advertir al haber considerado el a quo que existía una concurrencia de culpas en igual proporción, estamos ante un caso de vencimientos recíprocos. Por lo tanto, las costas deben ser distribuidas conforme a la distribución de responsabilidad que se hiciera.

Tal como lo tiene dicho V.E. *“Las costas deben distribuirse con los mismos porcentajes –en que se imputó la responsabilidad de las partes en el proceso-, toda vez que la declaración de derechos a favor del actor no lo ha sido por la totalidad de los daños verificados, ya que deberá soportar una parte proporcional correspondiente al porcentaje de responsabilidad que le ha sido atribuida. Se aplica, entonces, el criterio de que -como principio- la concurrencia de responsabilidades debe verse reflejada en el pago proporcional de los causídicos. En el caso,... el progreso parcial de la demanda se debe, antes que a una disminución cuantitativa de los rubros demandados -de difícil estimación, por no responder a pautas objetivas-, a la referida distribución de responsabilidades que la misma sentencia*

establece. Este resultado deberá reflejarse en la imposición de las costas, indebidamente cargadas en su totalidad a los demandados por aplicación del principio objetivo de la derrota que no rige en el caso, donde hubo vencimientos recíprocos. (arg. art. 108, CPCC). En suma, lo relevante en orden a la imposición de costas es advertir que los accionados no fueron declarados únicos responsables". (CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 1 S/ DAÑOS Y PERJUICIOS Nro. Sent: 19 Fecha Sentencia: 14/02/2017).

Por lo tanto, manteniendo el criterio expuesto en la jurisprudencia citada, que además resulta ser el que predomina claramente en nuestra jurisprudencia, corresponde, en cualquier caso, que V.E. acoja los agravios al respecto y ajuste la imposición de costas al resultado definitivo del proceso.

VI- HONORARIOS REGULADOS - ARTÍCULO 13,

LEY N° 24.432

Finalmente, mi mandante se agravia por las sumas reguladas en concepto de honorarios a los Dres. José Manuel Luna y Héctor Bernardo González Palacios y al Perito Ing. José Manuel Mena, en razón de que tales emolumentos, eventualmente a cargo de mi mandante, conforme a la imposición de costas determinada por el a quo, por las actuaciones exclusivamente limitadas a la instancia principal, equivalen al 28,59% o bien al 29,25% de la base regulatoria estimada, según se considere que al Perito Ing. Mecánico le corresponde percibir \$ 36.321,32 (equivalente al 6% de la base), como rezan los considerandos, o bien \$ 32.321,62 (5,34% de la base) referidos en la parte resolutive del fallo.

Es evidente que, en cualquier caso, al superar los honorarios regulados eventualmente a cargo de mi mandante, el 25% de la condena, corresponde aplicar las disposiciones del artículo 13 de la Ley N° 24.432, pues – sin menospreciar la tarea de los profesionales beneficiarios de los honorarios – existe una evidente desproporción entre el trabajo realizado (y su resultado) y los honorarios que le fueron regulados.

En efecto, los letrados han sido beneficiados con una regulación del 15% (más el 55% por su actuación en el doble carácter) por un proceso en el que sólo se atribuyera al demandado principal una responsabilidad del 50%.

A su vez, el perito Ing. Mecánico elaboró un breve informe, sin mayores complejidades que corre a fs. 490 de autos y por ello se le fijó un honorario superior al 5% de la base regulatoria, evidentemente desproporcionado con la complejidad de la tarea realizada.

Además, debemos señalar al respecto que el a quo sin ninguna razón aplica para fijar los honorarios al perito las disposiciones de una Ley destinada a profesionales de las Ciencias Económicas, pese a que existe una norma específica para Ingenieros, la Ley N° 7.902, que prevé un procedimiento para regular honorarios, que incluye la remisión de las actuaciones al Consejo Profesional de Ingenieros de Tucumán, para que realice la estimación prevista en el artículo 48 de dicha norma, sin perjuicio de que ella no resultaría vinculante para V.S. El a quo no cumplió tampoco con esa disposición.

En definitiva, sin perjuicio de lo expuesto respecto de la valoración de las labores realizadas por cada profesional, consideramos importante citar aquí que la Ley N° 24.432, a la que la Provincia se adhirió por Ley N° 6.705, prevé como tope a abonarse entre honorarios y costas el 25% del monto de la sentencia, disponiendo que *“los jueces deberán regular honorarios a los profesionales, peritos, síndicos, liquidadores y demás auxiliares de la justicia, por la labor desarrollada en procesos judiciales o arbitrales, sin atender a los montos o porcentuales mínimos establecidos en los regímenes arancelarios nacionales o locales que rijan su actividad, cuando la naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la tarea realizada o el valor de los bienes que se consideren, indicaren razonablemente que la aplicación estricta lisa y llana de esos aranceles ocasionaría una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que en virtud de aquellas normas arancelarias habría de corresponder”*.

Dispone asimismo *“Déjanse sin efecto todas las normas arancelarias que rijan la actividad de los profesionales o expertos que actúen como auxiliares de la justicia, por labores desarrolladas en procesos judiciales o arbitrales, en cuanto se opongan a lo dispuesto en el párrafo anterior”*.

La jurisprudencia de nuestros tribunales acogió las disposiciones de la Ley N° 24.432 en los siguientes términos:

“El propósito evidente de la norma – art. 13 ley 24432 - es evitar que, por la aplicación rígida y sin ninguna clase de otra consideración de escalas, mínimos o aranceles legales, la regulación sea evidente e injustificadamente desproporcionada con el interés económico del pleito. Vale decir que la ley busca que toda regulación de honorarios sea razonable, equitativa, proporcionada y basada en la realidad concreta de cada litigio, y, en aquellos casos en que estas virtudes no puedan ser ejercidas, brinda al juez los medios para apartarse fundadamente de una normativa estática o inicua y pueda aplicar los criterios morigeradores. Estimamos que esta norma resulta de aplicación en toda clase de proceso, máxime cuando tiene claro contenido económico como el proceso concursal y sus incidentes”.- DRES.: ACOSTA - LEONE CERVERA. (CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 3 S/ INCIDENTE DE REVISION - Nro. Sent: 614 Fecha Sentencia: 30/12/2014).

“Partiendo de la base de que los honorarios profesionales del abogado constituye una remuneración a su trabajo profesional y que para evaluar el mismo se debe tener en cuenta las pautas prescriptas por el art.15 de la ley arancelaria 5480, como el valor y calidad jurídica de la labor desarrollada, complejidad y novedad de la cuestión planteada y teniendo en cuenta situaciones de mero trámites existentes en autos, consideramos que es del caso la aplicación del art.13 de la ley 24432, en cuanto dispone que los jueces deberán regular honorarios a los profesionales intervinientes sin atender a los montos o porcentajes mínimos establecidos en los regímenes arancelarios nacionales y locales que rijan su actividad cuando la naturaleza, alcance tiempo o calidad de las tareas realizadas, indicare razonablemente que la aplicación estricta lisa y llana de esos aranceles ocasionaría una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que en virtud de aquellas normas arancelarias, habría de corresponder”. DRES.: MANCA - ALONSO. (CAMARA CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES - Sala 2 S/ EJECUCION FISCAL S/ INCIDENTE - Nro. Sent: 436 Fecha Sentencia: 19/11/2012).

Por lo expuesto, corresponde que V.E. acoja los argumentos expuestos en este apartado y ajuste las regulaciones practicadas a los Dres. Luna y González Palacios y al Ing. Mena a lo previsto por las normas citadas.

VII- RESERVA DEL CASO FEDERAL

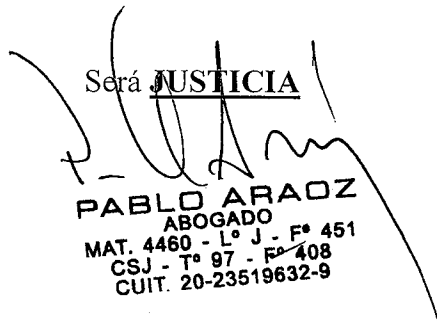
Siendo que el fallo del a quo se aparta claramente de las pruebas producidas en autos, lesionando de ese modo la igualdad de las partes y el derecho a la defensa en juicio y al debido proceso, introduzco la cuestión federal para poder, eventualmente, interponer el recurso extraordinario previsto por el artículo 14 de la Ley 48. Pido que se tenga presente.

III- PETITORIO

Pido, por lo dicho:

- 1) Que se tenga por constituido el domicilio digital.
- 2) Que tenga por expresados los agravios en contra de la sentencia dictada el 01.02.19.
- 3) Que tenga presente la reserva del caso federal formulada.
- 4) Que, oportunamente, dicte sentencia acogiendo el recurso de apelación interpuesto por esta parte y rechazando, en consecuencia, de manera íntegra la demanda interpuesta, con costas a la parte actora.

Provea V.E. de conformidad.

Será **JUSTICIA**

PABLO ARAOZ
ABOGADO
MAT. 4460 - L° J. - F° 451
CSJ - T° 97 - F° 408
CUIT. 20-23519632-9

